

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, que revocó la dictada en primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta.

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Segundo: Que por el líbelo de nulidad formal, se invoca la causal del artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que señala el recurrente, la sentencia se extiende a puntos que no han sido objeto de petición en el recurso de apelación, por lo que a su juicio aquello constituye el vicio de extra petita de conformidad a la causal denunciada.

Expone que el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, tanto en su parte considerativa como resolutive señala *“Que la parte demandante solicita en definitiva, se condene a los demandados a la cesación de los actos que violen el derecho protegido y a la adopción de medidas necesarias para evitar que prosigan esta infracción, y la indemnización correspondiente por el uso de la marca”*; no obstante que el recurso de apelación no contiene peticiones concretas dirigidas a los jueces de segunda instancia.

Tercero: Que tal como se ha sostenido reiteradamente, “el vicio de ultra petita se produce cuando la sentencia se aparta de los términos en que las partes sitúan la controversia, por medio de sus acciones, excepciones y defensas, alterándose su contenido, cambiando su objeto o modificando la causa de pedir;



igualmente, cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos que fijan la competencia del tribunal o cuando, en otra hipótesis, se emite pronunciamiento en relación a materias que no fueron sometidas a su decisión”.

Cuarto: Que el vicio de ultra petita es especialmente pernicioso ya que, al extender su pronunciamiento a una cuestión que no le fue sometida y que, por lo tanto, no fue debatida debidamente por las partes, el tribunal excede la competencia específica que estas le entregaron, incurriendo además en un vicio de incompetencia. Adicionalmente, falla una cuestión respecto de la que la parte afectada no ha podido defenderse ya que no fue debidamente alegada en el proceso, pronunciándose a este respecto sin el debido emplazamiento. De ello, que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 160, establece el principio fundamental que “Las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes resulta que el vicio invocado por el recurrente no resulta tal, desde que la solicitud planteada en la demanda, lo es en los términos que en definitiva fue concedida por los jueces del grado al revocar la sentencia de primera instancia. De lo anterior se colige que el demandado tuvo la oportunidad de defenderse de las acciones y peticiones efectuadas por la actora, sin que en caso alguno se hubiese alterado con el pronunciamiento efectuado por la Corte de Apelaciones la causa de pedir de la acción intentada. Lo anterior, no es óbice aun cuando el recurso de apelación no



señale las peticiones en forma expresa, desde que como se dijo, la resolución impugnada contiene las peticiones en que se funda la demanda; motivos todos que llevan a que el líbello de nulidad formal sea rechazado de plano.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Sexto: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia como infringidas “las normas generales del derecho de propiedad” contenidas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y 582 del Código Civil; asimismo, entiende que se vulnera el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039.

En el primer capítulo de su recurso, al señalar la infracción al derecho de propiedad, cuestiona los hechos acreditados en la causa, así como la prueba aportada en el juicio. Asimismo, denuncia la infracción al artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, lo que de suyo dice relación con aspectos de forma, lo que no es propio de este arbitrio de fondo. En este mismo apartado, refiere lo establecido en el artículo 111 de la ley N° 19039, a propósito de la sana crítica en cuanto a la valoración de la prueba, no obstante no haber denunciado tal precepto como violado, sin que exista un desarrollo al respecto en cuanto a cuál de los principios de aquella se pudo ver amagado; solo se limita a señalar un cuestionamiento a la apreciación de los medios probatorios allegados a la causa.

Séptimo: Que en cuanto al segundo de los errores de derecho denunciados, y que lo hace consistir en la infracción a lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, el recurrente reproduce dicho precepto, así como algunos pasajes de la sentencia, invocando en este apartado normas que no dicen relación con aquellas decisoria litis; para asimismo cuestionar la valoración a las probanzas efectuada por los jueces del grado.



Octavo: Que como primera cuestión resulta pertinente tener presente que acuerdo a lo prevenido en el artículo 772 N° 1) del Código de Procedimiento Civil, el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo debe señalar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y el modo en que ése o esos errores influyen sustancialmente en los dispositivo de la sentencia.

Que, analizado el recurso a la luz de las disposiciones legales referidas, y como se consigna en los considerandos que anteceden, se echa de menos que el arbitrio de impugnación, contenga el desarrollo exigido por la ley en cuanto a las normas legales infringidas, al modo cómo se habrían producido aquellas, y la forma en que ello influiría en lo dispositivo del fallo, lo que es imprescindible atendida la naturaleza de derecho estricto de este extraordinario arbitrio de nulidad sustancial. Sumado a aquello, la recurrente en ningún caso denuncia la infracción a los principios de la sana crítica, a las normas reguladoras de la prueba, sin perjuicio de alguna mínima mención al respecto; lo que resultaba de suyo esencial, ya que al no hacerlo los hechos asentados por los jueces recurridos resultan inamovibles.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, al haberse acreditado al parecer de los jueces recurridos, la infracción a la Ley de propiedad Industrial objeto de la litis, mal este tribunal de casación puede arribar a una conclusión diferente ante la nula posibilidad que aquello ofrece el libelo intentado.

Noveno: Que finalmente resulta también preciso señalar que el recurso en gran parte se construye en un cuestionamiento a los hechos de la causa, sin que como se dijo, se hubiese denunciado una afectación a los principios que



conforman la sana crítica que es la forma de valoración de la prueba en esta materia; teniendo presente que el objeto del recurso de casación en el fondo se circunscribe a la revisión y análisis de la legalidad de la sentencia, es decir, a la correcta aplicación del derecho, sobre la base de los hechos tal y como soberanamente los han dado por probados los jueces del grado en uso de las facultades que son de su exclusiva competencia, los que como precedentemente se señaló resultan inamovibles para este tribunal de casación, a menos que se hayan vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, lo que no ocurre en el caso de autos.

Décimo: Que atendido lo expuesto, el presente arbitrio debe ser rechazado en esta etapa de tramitación por adolecer de manifiesta falta de fundamentos.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se declaran inadmisibles** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N°112.421-20





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

